

# ACCIÓN COLECTIVA Y MOVILIZACIÓN EN LA GUATEMALA DE POSGUERRA: ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIETAL Y LAS POSIBILIDADES DE LO POLÍTICO

Patrick Illmer\*



Mujeres de Cobán, Alta Verapaz, Guatemala. Fotografía: Isabel Sanginés.

## Resumen

El artículo analiza el panorama de acción colectiva y movilización en la Guatemala de posguerra enfocándose en los procesos locales de defensa del territorio protagonizados por las comunidades rurales, así como en las protestas multitudinarias de 2015 en la Ciudad de Guatemala. Partiendo de la crisis de los pará-

metros liberales de la política que marcan este periodo, destaco dos tendencias: por un lado, la reconfiguración de lo político que dio lugar a nuevas formas de participar, antagonizar y organizar; por otro lado, los contrastantes horizontes de posibilidad que marcan a los sectores partícipes de las principales pautas organizativas.

*Palabras clave:* Acción colectiva, Guatemala, lo político, defensa del territorio, protestas anti-corrupción.

\* Doctor en Estudios de Paz de la Universidad de Bradford (Reino Unido). Actualmente se desempeña como investigador Posdoctoral en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Este artículo fue elaborado en el curso de esta estancia posdoctoral financiada por DGAPA-UNAM.

## Introducción

El panorama de la acción colectiva en la Guatemala de posguerra ha estado marcado por una amplia gama de expresiones reivindicativas y contestatarias, unas más latentes, otras más visibles en el espacio público. Sin embargo, el campo vibrante de protestas y movilizaciones también se ha caracterizado por una marcada fragmentación, así como por la ausencia de formas organizativas con capacidad de integración más amplia. Este artículo analiza las pautas de la acción colectiva en Guatemala a partir de su surgimiento en forma de síntomas de desacuerdo y de momentos de crisis enfocándose en dos problemáticas que sintetizo bajo las ideas de “la reconfiguración de lo político” y “los horizontes contrastantes de posibilidad”.

El primer aspecto relacionado con “la reconfiguración de lo político”, constituye un proceso que no es privativo de Guatemala, pero que como fenómeno social adquiere características particulares en este contexto. La crisis de las formas liberales en sus intentos de delimitar lo político y concentrar procesos de toma de decisión como resultado del consenso entre élites a partir de la transición hacia una democracia formal iniciada en 1984, coincide con la evolución en las formas y rasgos de la acción colectiva en el periodo de posguerra. Factores como: la desconfianza hacia las expresiones partidarias y la clase política constituida; la crisis de las formas organizativas asociadas con una línea ideológica de izquierda, y la ausencia de movimientos sociales con una capacidad articuladora amplia, han dado lugar al surgimiento de formas reactivas y multitudinarias para canalizar este descontento en el ámbito de lo urbano, mientras en el rural se han consolidado procesos de resistencia contra las políticas neoliberales extractivistas, en los cuales predomina un enfoque local.

## ... la crisis de los parámetros liberales de hacer política ha sido abordada de diferentes maneras.

En la literatura, la crisis de los parámetros liberales de hacer política ha sido abordada de diferentes maneras. Algunos teóricos (Žižek, 1991; Rancière, 1999; Mouffe, 2005; Swyngedouw, 2009) han planteado la idea de “la pospolítica”, señalando el consenso alrededor de

la reducción de la política a mecanismos tecnocráticos de gobierno y al terreno de la democracia representativa, lo cual estimula dinámicas despolitizantes entre la sociedad. Con esta delimitación de la participación se busca garantizar una administración favorable para la liberalización económica y la perpetua ampliación de relaciones capitalistas. Complementando estos planteamientos hasta cierto punto,

otra corriente (por ejemplo Hardt y Negri, 2004; Beasley-Murray, 2010; Kioupkiolis, 2018) ha avanzado la tesis de que, como legado de estas tendencias elitistas y excluyentes de la política formal, se está entrando a una fase pos-hegemónica. Esta idea cuestiona que los procesos de acción colectiva necesariamente se canalicen en articulaciones partidarias caracterizadas por cierta concentración de poder, mecanismos de representación, un marco ideológico definido y una estructura de liderazgo supra-ordenado. Beasley-Murray (2010) incluso anuncia el fin de las pautas hegemónicas de hacer política y señala un giro hacia formas multitudinarias. Autores como Ardití (2007) o Kioupkiolis (2018) se muestran más cautelosos, pero plantean que las articulaciones con las mencionadas características hegemónicas compiten con otros modos colectivos e informales de acercarse a lo político.

El artículo no necesariamente profundiza en estas discusiones teóricas. Sin embargo, a partir de los desarrollos de la acción colectiva en las últimas décadas en Guatemala intenta trazar los cambios o lo que entiendo como procesos continuos de reconfiguración de lo político. En línea con la literatura mencionada, me baso en un entendimiento de “lo político”

cercano a Schmitt (2009), como un campo que antecede y excede a la política. Por ende, lo comprendo como una dimensión analítica que rebasa las interacciones en o alrededor del terreno institucional. A la vez, en línea con Rancière (1999), percibo las dinámicas evolutivas y contingentes como algo inherente al campo de lo político, ya que los parámetros del orden societal son constantemente cuestionados por los múltiples segmentos, grupos y actores que lo integran de forma diferenciada en términos de derechos y recursos, pero también con base en sus diferentes marcos culturales y políticos.

La resultante complejidad societal es especialmente marcada en el caso de países multiculturales como Guatemala,<sup>1</sup> lo que se relaciona con el segundo aspecto que destaco a lo largo del artículo, a saber, con la persistencia de lo que denomino “horizontes contrastantes de posibilidad” que caracterizan a la población más activa y participe en las acciones colectivas de protesta, organización y movilización. Con esto me refiero a los sectores de las clases medias, así como a los grupos populares y comunitarios de la sociedad. Sostengo que las características geográfica y socialmente diferenciadas de varios procesos —entre ellos los modos de subsunción a las relaciones capitalistas coloniales y poscoloniales; los contrastantes hábitos y procesos de significación vinculados a la diversidad étnica y cultural, así como las diferentes tradiciones de resistencia— se traducen en procesos situados de prefiguración de las posibilidades de la acción colectiva y de sus prácticas.

La perspectiva analítica vinculada a estos contrastantes horizontes de posibilidad presta atención a las formas de enmarcar el accionar colectivo e integra la distinción deleuziana en-

<sup>1</sup> Guatemala tiene 4 grupos étnicos divididos en mestizos, garífunas, población indígena xinca y maya, que tienen 21 grupos lingüísticos diferentes.

## El ejército estaba enfrentando una crisis de legitimidad por protagonizar violaciones masivas de derechos humanos...

tre características virtuales y características actuales inherentes a procesos organizativos (De Landa, 2002). Las primeras indicarían las posibilidades de acción inmanentes a un proceso organizativo, las segundas se refieren a las estrategias, acciones y características que efectivamente son puestas en práctica. Esto implica un análisis de los procesos de selección y concreción de determinadas estrategias y objetivos a partir de un horizonte de posibilidades social, cultural y geográficamente situado, que en muchos casos se traduce en formas organizativas diferentes.

El artículo empieza delineando el panorama sociopolítico general en la Guatemala de posguerra, para luego abordar las características más concretas de las movilizaciones en el área rural, así como en el área urbana de la Ciudad de Guatemala.

### La paz liberal: consenso neoliberal, desradicalización y fragmentación

Los representantes de las dos facciones combatientes fueron el centro del plano formal de las negociaciones de paz para acordar el término del conflicto armado de 36 años (1960-1996). Por un lado, el gobierno y los representantes de la institución militar, por otro lado, la comandancia de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), coordinación surgida en 1982 para crear un frente unido entre los grupos guerrilleros. Sin embargo, las facciones que integraban estos dos campos también estaban pasando por situaciones críticas. El ejército estaba enfrentando una crisis de legitimidad por protagonizar violaciones masivas de derechos humanos en el curso de su ofensiva contrainsurgente y llegó a ser sujeto de fuertes presiones de reducción y retiro del ámbito cívico político. La URNG había perdido una generación entera de militantes en

los años más álgidos de la represión contrain-surgente. Además, debilitada por divisiones internas, con el avance de las negociaciones los cuestionamientos alrededor de su representatividad aumentaron incluso entre los sectores sociales más cercanos. El grupo que supo capitalizar este escenario de vulnerabilidad de los protagonistas del conflicto armado fueron las élites económicas tradicionales. Aún con el enfrentamiento armado en curso, habían aprovechado este vacío para posicionarse estratégicamente como los garantes de la transición, a pesar de su evidente alianza con el ejército y el apoyo incondicional brindado a las políticas de tierra arrasada.

Incluso desde la transición hacia una democracia formal en 1984, el régimen político había asumido un carácter elitista, correspondiente a las concepciones de democracia dominantes en este momento, según las cuales ésta podía funcionar perfectamente sin un alto nivel de participación de todos los ciudadanos (Held, 1987:192). La transición se había encaminado con los enfrentamientos armados todavía en curso, y mientras los partidos políticos se convirtieron en los principales vehículos de participación, las élites oligárquicas representaron los únicos actores capaces de aportar recursos financieros para los partidos políticos. A la vez hicieron valer su influencia sobre los nombramientos en el sistema judicial con la cooptación de las comisiones de postulación (Arrazola, 2014; Nómada, 2014). A lo largo de las siguientes décadas y apoyándose en la apertura económica que brindaron los Acuerdos de Paz, las élites económicas tradicionales consolidaron su estatus dominante con el control sobre las expresiones institucionales, aunque nuevos actores lograron insertarse en estas redes elitistas o establecieron sus propias sub-redes. Las élites emergentes, vinculadas en gran parte a sectores militares con recursos y conocimientos acumulados a lo largo del conflicto armado, se adaptaron a las reglas de competencia estable-

cidas para rivalizar en el plano económico y político con las facciones oligárquicas (Illmer, 2018a). En el centro de esta disputa estuvieron las oportunidades de acumulación derivadas de la reconfiguración neoliberal del Estado y cuya expresión más inmediata fue la privatización de los principales servicios y bienes del Estado (Palencia Prado, 2002).

... se  
**profundizaron las  
 fisuras dentro del  
 espectro  
 organizativo de la  
 izquierda  
 tradicional...**

Mientras las élites económicas tradicionales y emergentes tomaron control del escenario de los partidos políticos y de los gobiernos en turno, las expresiones organizativas cercanas o derivadas de la URNG empezaron a encaminarse hacia la fragmentación y la gradual desarticulación. Las primeras participa-

ciones electorales parecían indicar que las expresiones partidarias de izquierda iban a poder consolidarse como una fuerza política en el panorama democrático. Sin embargo, después de los resultados del Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG)<sup>2</sup> en 1995 y de la URNG<sup>3</sup> en 1999 perdieron la capacidad de articular planteamientos políticos adecuados para integrar y movilizar segmentos de la población (Sáenz de Tejada, 2007). A la vez, la crisis de representatividad del liderazgo se agravó por sus esfuerzos de concentrar los procesos de toma de decisiones al interior de las expresiones partidarias. Como consecuencia se profundizaron las fisuras dentro del espectro organizativo de la izquierda tradicional, mientras alienaba a otros estamentos de la sociedad.

<sup>2</sup> El FDNG logró 6 diputaciones y 19 alcaldías municipales.

<sup>3</sup> La URNG logró 9 diputaciones y 14 alcaldías municipales, así como 12,6% de los votos a nivel nacional.

De forma paralela a las expresiones partidarias, en el ámbito de la organización sindical, popular e indígena, los signos de fragmentación ya se habían anunciado desde antes de la firma de los Acuerdos de Paz. En línea con las tendencias en el continente latinoamericano, el tema alrededor de la identidad cultural y lingüística empezaba a cobrar vigencia como reivindicación entre organizaciones indígenas que reprocharon a las facciones guerrilleras sus limitaciones en el abordaje de las dimensiones étnicas de la opresión durante el proyecto insurgente, instigando un distanciamiento (MacLeod, 2013). Además, en el marco de los Acuerdos de Paz se aceleró la formalización de múltiples expresiones organizativas bajo la figura de ONG. Esta dinámica se vincula con el auge de una concepción particular de “sociedad civil”

entre las instituciones internacionales multilaterales y de cooperación. Fue la presión de instancias como el PNUD y el Banco Interamericano, quienes, desde su rol como asesores de las negociaciones de paz, abogaron por la creación de una Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) con el mandato de elaborar propuestas en los aspectos claves de los Acuerdos. Las organizaciones y programas no-gubernamentales fueron promovidos como una alternativa a los partidos políticos dominados por las redes de élites en un intento por constituir nuevos mecanismos de participación con incidencia en el terreno institucional (Howell y Pearce, 2001:160-173).

La presión de los actores internacionales obligó a los sectores económicos y militares dominantes a aceptar esta forma de participación. Sin embargo, pronto la influencia internacional trascendió la facilitación de espacios de participación, dado que prácticamente todas las organizaciones participantes en la ASC estaban siendo financiadas por donantes internacionales (Howell y Pearce, 2001:153). Esto

consolidó condiciones y criterios para las organizaciones y en muchos casos incentivaba una línea discursiva y de acción poco radical que priorizaba la validación por parte de los entes internacionales. Una gran parte del liderazgo de las organizaciones terminó siendo profesionalizado e institucionalizado mientras actuaba sin buscar un respaldo para sus planteamientos con sectores sociales. En su lugar se enfocaron al desarrollo de actividades y proyectos específicos con el apoyo de los donantes internacionales (Biekart, 1999; Bastos, 2010). Al mismo tiempo, se distanciaron de los procesos organizativos de las comunidades rurales y de la conciencia rural (Howell y Pearce, 2001:158).

En este sentido, la década de los noventa y las dinámicas alrededor de los Acuerdos de Paz en

el marco de un régimen político formalmente democrático influyeron en la preparación del camino para las posteriores evoluciones en el campo de la acción colectiva y los modos de expresar inconformidad. Las afiliaciones guerrilleras llevaron sus diferencias internas a la etapa de la paz sin lograr una articulación partidaria o una adecuación de su horizonte de cambio al nuevo contexto. En contraste, los partidos políticos de las élites tradicionales y emergentes fueron hábiles para tomar ventaja de la apertura democrática. Aprovechando su superioridad de recursos, así como la deslegitimación de “discursos izquierdistas” en el espacio público, convirtieron la figura del partido político en un instrumento electoral, dependiente de su financiamiento, sin diferencias ideológicas y basado en una integración clientelista del electorado. Esto dio lugar a la dinámica que Torres-Rivas ha descrito como “un cementerio de partidos políticos” (Torres-Rivas, 2008:106), ya que en treinta años de elecciones democráticas se habían formado más de cincuenta partidos, de los cuales más de treinta y cinco desaparecieron.

... los partidos políticos de las élites tradicionales y emergentes fueron hábiles para tomar ventaja de la apertura democrática.

Por otro lado, las agrupaciones que habían sobrevivido a la resistencia contra los regímenes autoritarios fueron subsumidas a un marco liberal de sociedad civil condicionado y auspiciado en gran parte por los donantes internacionales.<sup>4</sup> Al mismo tiempo que se fueron profundizando las divisiones al interior de la ASC, sus formas asociativas y planteamientos fomentaban su alejamiento de una gran parte de los sectores populares y comunitarios (Howell Pearce, 2001:151). Los resultados del referéndum de 1999, convocado para decidir sobre una serie de reformas constitucionales derivadas de los Acuerdos de Paz, entre ellas la conversión de Guatemala a una nación pluricultural, fue un reflejo de este distanciamiento. La poca participación y el rechazo a las propuestas en el referéndum evidenciaban no sólo la distancia entre las organizaciones indígenas partícipes de las negociaciones y las comunidades rurales. También demostraban la capacidad de las élites para movilizar sectores claves de la clase media y sentar las bases para una participación despolitizada de sectores populares y comunitarios en contiendas electorales.<sup>5</sup>

En el área rural, las organizaciones campesinas habían mantenido cierto dinamismo, principalmente con base en una serie de ocupaciones de tierra al final de los años noventa. Sin embargo, la reconfiguración neoliberal del Estado y de los mecanismos diseñados para solucionar problemas de acceso a la tierra promovidos por las élites y las instituciones financieras internacionales, impulsaron un gradual

<sup>4</sup> Esta observación obviamente merece ser matizada, ya que hubo ONGs que lograron mantener cierto margen de autonomía especialmente con respecto a los grandes financiadores multilaterales y la USAID. Esta relativa independencia se reflejó especialmente en las organizaciones que acompañaron a las comunidades en el área rural en el marco de sus resistencias contra las políticas neoliberales, las cuales son abordadas en el próximo apartado.

<sup>5</sup> A pesar de este resultado, una parte de las organizaciones y su liderazgo seguía profundizando su acercamiento a espacios institucionales al aceptar posiciones en el marco de diferentes gobiernos de corte neoliberal. Esta participación se basó en la idea de que “la acción de unos pocos profesionales iba a estar en capacidad de transformar la exclusión de todo un pueblo” (Bastos, 2010:26) y selló la ruptura entre una parte de este liderazgo y los sectores comunitarios y populares.

debilitamiento y fragmentación de las organizaciones. La reforma agraria establecida en los Acuerdos de Paz fue reemplazada por un sistema de reforma agraria basado en el mercado y alimentado por una ola de préstamos y créditos (Granovsky Larsen, 2014:6). Al paso que la influencia de los movimientos campesinos retrocedió y el distanciamiento del espectro de varias organizaciones indígenas de las comunidades aumentó, las dinámicas organizativas en el área rural fueron apropiadas por otros actores colectivos. En el marco de las resistencias a otras expresiones de las políticas neoliberales —tales como los intereses orientados a la mercantilización y a la extracción de recursos naturales— fueron las comunidades rurales las que diseñaron nuevas maneras de acercarse a lo político.

### **La defensa del territorio en la Guatemala rural: lo local como horizonte político**

Como se esbozó en el apartado anterior, el carácter elitista del régimen político después de la transición hacia una democracia formal promovió una desmovilización de amplios sectores de la población. La pérdida de horizontes de cambio social, la fragmentación de las expresiones partidarias de izquierda, la “oenegeización” de amplios sectores del movimiento social, así como la concentración de los procesos de toma de decisión en los centros y actores de la política formal se combinaron con una reconfiguración neoliberal del Estado. Un efecto de esta reconfiguración en el periodo de posguerra fue la subordinación del marco institucional a una agresiva promoción de los intereses dirigidos a la explotación de recursos naturales. A la vez, la resistencia surgió principalmente en las áreas directamente apuntadas por estas políticas: los espacios rurales y comunitarios.

Las múltiples resistencias locales incitadas por el reordenamiento territorial infundieron un nuevo ímpetu al campo de la acción colectiva, aunque el tema ya había motivado resistencia

en décadas anteriores. Entre estas expresiones previas destaca la oposición de las comunidades en el departamento de Baja Verapaz a la construcción del proyecto hidroeléctrico Chixoy en los años setenta y ochenta o, a finales de los noventa, la articulación de las comunidades Queqchís en su oposición a las concesiones mineras en el lago Izabal. Sin embargo, fue a partir del 2004 que la temática de los recursos naturales empezó a cobrar mayor centralidad en los procesos organizativos, a medida que la información sobre las concesiones petroleras, mineras e hidroeléctricas llegaba a las comunidades.

Aunque muchas de las licencias habían sido concedidas en décadas anteriores, debido al secretismo que rodeaba las operaciones de las instancias estatales y las empresas, las comunidades y zonas peri-urbanas afectadas no se habían percatado de los proyectos previstos en sus alrededores. La Mina Marlin, uno de los primeros proyectos impulsados en el periodo posconflicto en el departamento de San Marcos, evidenciaba esta ausencia de transparencia. Durante años una empresa subsidiaria avanzó en la compra de terrenos alegando que las tierras iban a ser empleadas para proyectos agrícolas (Van de Sandt, 2009:26-27). Sin embargo, estas áreas llegaron a constituir parte del proyecto minero operado por una empresa subsidiaria de la empresa canadiense Goldcorp. La gran mayoría de los proyectos fue caracterizada por pautas similares de encubrimiento en su proceso de implementación.

En el contexto de las protestas contra los primeros proyectos de la posguerra en el altiplano indígena también se dieron ajustes en los marcos referenciales de las movilizaciones. Las comunidades empezaron a articularse más explícitamente alrededor de la “defensa del territorio”, una idea que expresaba el apego socio-político y cultural a determinados espacios físicos. En el curso de estas resistencias, el

“territorio” llegaba a representar más de un entorno físico y a constituir un significativo repleto de asociaciones y significados derivados de las interacciones cotidianas de las comunidades (Illmer, 2016:9-10). A la vez, los marcos referenciales de las comunidades no son estáticos y se nutren de un hábito en continua evolución y en relación con dinámicas contextuales. Estos cambios también se expresan en prácticas concretas y se vinculan con la insistencia en una determinación local de las relaciones sociales y políticas en sus territorios.

A pesar del potencial conflictivo que se manifestaba en las confrontaciones entre Estado y comunidades en el contexto de la implementación de los primeros proyectos extractivos, los gobiernos en turno aumentaron el número de licencias.<sup>6</sup> De forma paralela, en las áreas rurales se multiplicaron las dinámicas organizativas motivadas por la defensa del territorio. A lo largo de los siguientes años múltiples nodos locales de resistencia surgieron, a la vez que una red de organizaciones ambientales, sociales y de derechos humanos que habían mantenido una cercanía con las comunidades, promovía la difusión de información acerca de los proyectos.

El discurso de derechos acompañó estas resistencias, para alegar la falta de consulta a la población local, así como los posibles impactos ambientales de los proyectos. En parte, este discurso de derechos representaba un legado de las experiencias de resistencia al régimen autoritario. Asimismo, la apertura de ciertos márgenes para su articulación constituyó una de las pocas conquistas sociales de los Acuerdos de Paz y permitió un espacio de denuncia en las instancias del Estado. Simultáneamente, las articulaciones comunitarias representaron más bien una “apropiación vernácula” del dis-

<sup>6</sup> Las concesiones para licencias de minería metálica aumentaron de 3 durante el gobierno Arzú (1996-2000) a 26 bajo el gobierno de Portillo (2000-2004) antes de registrar otra subida a 64 durante el gobierno de Berger (2004-2008).

curso de los derechos humanos (Merry, 2006), anclada en sus propios conceptos de injusticia, permitiendo de este modo una traducción de sus demandas al lenguaje del Estado.

Además, en el altiplano indígena las dinámicas organizativas imprimieron un mayor énfasis en los aspectos étnicos aunque, en muchos casos, en los espacios comunitarios esta articulación contrastaba con los discursos puristas promovidos por organizaciones y élites mayas (Vanthuyne, 2009). En lo comunitario, similar a la apropiación del discurso de los derechos de los pueblos indígenas, la integración de discursos con un énfasis étnico también ha representado una adaptación táctica, sin que constituya una apropiación identitaria invariable en una continuidad histórica. Los territorios y la población indígena han sido continuamente objeto de transformaciones. Al mismo tiempo, las comunidades han estado acostumbradas a dinámicas de exclusión, discriminación y a la privación de poder político. Por ende, en la práctica, los cálculos pragmáticos y la flexibilidad identitaria durante amplios periodos ha sido paradójicamente integral a su persistencia colectiva. Además, una perspectiva de complejidad que tome en cuenta las historias y procesos locales sigue siendo clave para leer la persistencia y las evoluciones políticas y culturales en los diferentes espacios. En unos casos estas evoluciones se desarrollaron al ritmo colectivo de la comunidad; en otras áreas, las décadas del conflicto armado, así como la subordinación e integración a las dinámicas del capitalismo neoliberal, han profundizado diferenciaciones políticas y culturales al interior de las comunidades.

Como resultado, en muchos lugares las luchas en torno al territorio se han consolidado no sólo como una articulación antagonista de las comunidades frente al Estado y las élites. También llegaron a constituir una reivindicación de determinados significados y planteamientos al interior de las comunidades. De es-

te modo, con sus respectivas particularidades, los diferentes puntos de resistencia manifiestan la apropiación de procesos de significación alrededor de aspectos como la tierra, el territorio, las ideas de desarrollo y los bienes comunes. En muchos casos, anclados en su propio marco lingüístico, resaltan significados y prácticas con un énfasis relacional que enfatiza la interdependencia entre la naturaleza y la colectividad (Illmer, 2016:66). Igualmente, son estos procesos diferenciales de significación los que insertan una incompatibilidad con las concepciones de desarrollo promovidas por el Estado y las élites, pero también acentúan el contraste con los imaginarios y horizontes de posibilidad de los sectores de clase media de los centros urbanos.

Una dimensión central de los procesos de defensa del territorio ha sido el cuestionamiento de los procesos institucionales de toma de decisiones que habían allanado el camino para la implementación de los proyectos. Especialmente, la ausencia de una consulta a la población afectada en los territorios —a pesar de estar esbozado en la legislación internacional y nacional— se consolidó como una de las principales fuentes de indignación. En respuesta, integrantes de las comunidades procedieron a desarrollar sus propios mecanismos procedimentales para dejar constancia de su desacuerdo desde el plano local, a través de una forma auto-organizada de referéndum y de procesos de consultas comunitarias.<sup>7</sup>

Para muchos puntos de resistencia, las consultas representan una actualización de prácticas con un legado

... lo local  
apareció como la  
plataforma  
principal de  
enunciación para  
las resistencias.

<sup>7</sup> Hasta la fecha, las consultas comunitarias alrededor de la temática de los recursos naturales han sido organizadas en 81 municipios del país. Han sido desarrolladas en dos modalidades: en forma de Consultas Comunitarias de Buena Fe o de Consulta de Vecinos. Las principales diferencias están en los marcos legales en los cuales se amparan. Mientras la Consulta Comunitaria de Buena Fe se basa en convenios internacionales de legislación indígena como la convención 169 de la OIT, la Consulta de Vecinos se basa en la legislación nacional, como la legislación municipal.

anclado en la cultura política y la memoria colectiva de las comunidades. Al mismo tiempo pone en evidencia cómo el avance de las políticas orientadas a la explotación de recursos naturales en muchas áreas conllevó una revitalización de significados de comunidad y sentidos de pertenencia colectiva que se expresan en el hecho de que “hace sentido organizarse como comunidad”. El resultado fueron prácticas híbridas, a partir de las cuales los integrantes de las comunidades desarrollaron su resistencia basada en esta oscilación entre el pasado e influencias recientes. En muchos casos, estas consultas se amparan en mecanismos deliberativos centrados en la asamblea comunitaria como el espacio principal para la toma de decisiones y la búsqueda de consensos. En este marco, representan intentos de repensar las pautas procedimentales vinculadas a los cánones minimalistas de la democracia formal y de subvertir a tentativas de poner límites a la apropiación de lo político en términos de participación y deliberación local (Illmer, 2018b).

A pesar de haber sido asociadas principalmente con comunidades indígenas, desde un inicio las pautas de la defensa del territorio han trascendido las zonas indígenas y se fueron desarrollando en zonas mayoritariamente ladinas. Sus experiencias evidencian cómo en estos territorios resuenan perspectivas relacionales de forma parecida entre los comunitarios, aunque sea desde su propio punto de partida ontológicamente situado. Al igual que en las zonas indígenas, en múltiples comunidades ladinas la resistencia llegó a consolidarse como un asunto de sentido común dada su dependencia del agua y la vulnerabilidad de su hábitat al ser expuesto a fuentes de contaminación como las que producen los proyectos extractivos. Además, la respuesta del Estado al aplicar tácticas de criminalización y represión para desarticular las resistencias profundizó el carácter antagónico de las articulaciones locales.

En el contexto de la cooptación de los centros políticos y espacios institucionales por parte de las élites y la erosión de los partidos políti-

cos como instrumentos de participación, lo local apareció como la plataforma principal de enunciación para las resistencias. Históricamente, en área rural ha representado el espacio más prometedor para consensuar y potenciar las demandas locales y buscar soluciones a los problemas concretos de estas áreas. En este sentido, muchos de los procesos de defensa del territorio dialogan con la idea de autonomía. Articuladas de forma más explícita en las comunidades indígenas —en parte por el uso táctico de los marcos legales que respaldan su autodeterminación— las concepciones de autonomía son integradas no necesariamente en el sentido del intento de escapar a la influencia de otros. Más bien, se articulan como una práctica de generación de normas y relaciones basadas en la participación directa de las personas que viven con ellos.

### **Cuando la ciudad despierta: las protestas multitudinarias del 2015**

En la historia reciente, la sombra de las dictaduras militares y su legado ha caracterizado el panorama de la acción colectiva de la Ciudad de Guatemala. Las masivas manifestaciones del vibrante movimiento popular y sindical de la ciudad, que todavía en 1977 había llevado a decenas de miles de personas a recibir la marcha de los mineros de San Idelfonso Ixtahuacán, se fueron convirtiendo en movilizaciones fúnebres (Levenson, 2013:195). Poco a poco las expresiones masivas de descontento se convirtieron en eventos para visibilizar masacres y acompañar los entierros de figuras políticas asesinadas principalmente durante la dictadura represiva del general Romeo Lucas García (1978-1982). A la vez, la represión iba desarticulando e imposibilitando cualquier expresión de organización social con un carácter más sostenido en la zona metropolitana.

El debilitamiento y la fragmentación de las expresiones organizativas en estos periodos de represión también conllevaron una desintegración de horizontes de cambio social y de arti-

culaciones “desde abajo” en las zonas populares de la ciudad, al mismo tiempo que el área urbana seguía creciendo de forma incesante. La huida de migrantes como consecuencia de la destrucción del terremoto de 1976 y las ofensivas contrainsurgentes incrementaron los números en los asentamientos, los cuales habían sido fundados en décadas anteriores por poblaciones expulsadas del campo por la falta de trabajo y tierra (Móran Mérida, 2011:43-48). La dispersión, así como los traumas causados por la guerra y el desplazamiento fomentaron dinámicas de desconfianza y aislamiento en las interacciones sociales, creando un terreno poco fértil para dinámicas de acción colectiva. A la vez fueron complementados en el curso de los años por dinámicas despolitizantes favorecidas por una vinculación clientelista de los comités de vecinos con las autoridades municipales, así como por la ola de iglesias evangélicas que a partir de los años noventa invadieron los más de 270 asentamientos de la ciudad (Levenson, 2013:203-206).

Las agrupaciones de carácter sociopolítico que volvieron a surgir en el contexto de los Acuerdos de Paz se consolidaron, en línea con las pautas fragmentarias inherentes al núcleo urbano, como expresiones sectoriales. La agudización de las condiciones de pobreza impulsó la formación de una serie de organizaciones de pobladores para demandar el acceso a la vivienda, suelo y servicios básicos (Morán Mérida, 2011:98). Otras expresiones más esporádicas de acción colectiva se registraron en protesta por el aumento en el costo del transporte público, asimismo hubo protestas de vendedores informales, manifestaciones de los sindicatos de maestros, así como movilizaciones de estudiantes normalistas y universitarios en contra de las reformas educativas. Mientras en estos movimientos de origen urbano del periodo de posguerra predominaba un carácter sectorial —en algunos

casos también con tintes conservadores—<sup>8</sup> la Plaza de la Constitución de la ciudad se llenaba periódicamente con expresiones de descontento del área rural. La participación urbana que acuerpaba estas manifestaciones casi nunca sobrepasaba los centenares de personas asociadas a la red de organizaciones sociales y expresiones políticas de izquierda.

Con esta desarticulación de los sectores populares y el acomodamiento desinteresado de la clase media urbana de la ciudad, resultó aún más sorpresivo el surgimiento repentino de dinámicas de movilización masiva en el año

2015. Los hechos que desencadenaron las protestas fueron precedidos por un contexto en el cual la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)<sup>9</sup> y el Ministerio Público ampliaron su perímetro de investigación para acercarse a estructuras de corrupción enquistadas en el aparato estatal. Al mismo tiempo

llegaron a ser evidentes las maniobras por parte de la clase política, las élites oligárquicas y en particular del gobierno, para no renovar el mandato de la CICIG que estaba por expirar en septiembre del mismo año. Sin embargo, Estados Unidos, una de las principales fuentes de financiamiento de la CICIG, inclinó la balanza de manera determinante a favor de una permanencia de la comisión, principalmente por responder a sus intereses en la persecución y extradición de supuestos narcotraficantes (Álvarez Aragón, 2016:7). Esta presión, ejercida en conjunto con otros donantes internacionales, fue clave porque a pesar de contar con el apoyo de las organizaciones de dere-

... las líneas de investigación del caso llegaron a las más altas instancias del gobierno...

<sup>8</sup> Entre las manifestaciones conservadoras se pueden mencionar las marchas de sectores de la clase media y media alta en mayo de 2009 promovidas por los partidos de oposición para manifestarse en contra del presidente Álvaro Colom (2007-2011) por el supuesto asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Las investigaciones posteriores demostraron su inocencia.

<sup>9</sup> La CICIG es un organismo creado en el 2006 por medio de un acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala con la finalidad de apoyar a las instancias estatales en la investigación y el desmantelamiento de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

chos humanos y justicia, amplios sectores de la sociedad urbana veían con indiferencia el trabajo de las instancias de investigación (Álvarez Aragón, 2016:7).

Fueron justamente las detenciones y la presentación de los resultados preliminares de un proceso de investigación por parte de la CICIG y el Ministerio Público el 16 de abril que desataron la ola de movilizaciones multitudinarias que marcó a Guatemala entre los meses de abril y septiembre de 2015.<sup>10</sup> La denuncia presentada por estas instancias buscaba desarticular una red criminal dedicada a la defraudación aduanera, llevando en un primer momento a la captura del jefe y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, así como a 12 cómplices. Sin embargo, las líneas de investigación del caso llegaron a las más altas instancias del gobierno, ya que el presunto cabecilla de la banda fue presentado como Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Además, quedó en evidencia que Baldetti había encubierto y facilitado la fuga inicial de Monzón después de la circulación de la orden de captura en su contra.

En una primera reacción a las investigaciones, los planteamientos de pedir la renuncia del presidente y la vicepresidenta empezaron a tener eco en las redes sociales. Después de unos plantones frente a la casa presidencial —que no captaron la atención pública— empezó a circular la convocatoria para una concentración en la Plaza de la Constitución para el 25 de abril de 2015. Usando las redes sociales como principal medio de difusión, los llamados resonaron especialmente entre una generación joven de estudiantes y sectores empresariales y profesionales de la clase media y media alta urbana. Ya la convocatoria para las primeras concentraciones bajo el hashtag de #RENUNCIAYA marcaron las pautas organiza-

tivas que asumieron las manifestaciones de los siguientes meses, entre ellos el énfasis en distanciarse de manera explícita de cualquier agrupación o partido político.

No hay ninguna agrupación ni política ni de otra índole detrás de esta invitación. Somos un grupo de amigos que decidimos conforme a nuestro derecho ciudadano de manifestar, protegido constitucionalmente, mostrar nuestro hastío e invitar a nuestros amigos a unirse... Ningún partido político o grupo ciudadano está invitado como tal a la manifestación. Si se desea participar, invitamos a que se haga en calidad de ciudadanos individuales (Prensa Comunitaria, 2015).

El distanciamiento de las expresiones partidarias fue motivado por diferentes factores, entre ellos el hecho de que Guatemala se encontraba en un año electoral, lo cual aumentaba el riesgo de intentos de instrumentalización de las protestas por parte de los partidos. También tenía la intención de facilitar una apropiación amplia de la convocatoria entre la población urbana, en especial entre la clase media tradicionalmente conservadora y caracterizada por una suspicacia para adherirse a articulaciones consideradas “de izquierda”. Además, se trató de la apropiación de un espacio político promovido por una nueva generación de posguerra que sin la experiencia de las décadas represivas había perdido el temor de manifestarse y con cierta inocencia política buscaba dar aire a sus sentimientos de indignación. Para estos grupos, el ciclo de protestas representó un proceso de aprendizaje y politización en el curso del cual desarrollaron sus propias formas de percibir y acercarse a lo político. Como expresa Solís: “Entendimos que lo ‘político’ no hace referencia únicamente a lo partidista, sino a una forma de relacionarnos entre sí. Lo político surge en contacto con el otro /la otra. Y así comenzamos a caminar...” (Solís, 2016:15).

<sup>10</sup> El artículo se enfoca en las movilizaciones en la Ciudad de Guatemala, aunque se dieron manifestaciones con una participación bastante menor en otras cabeceras departamentales como Quetzaltenango, Totonicapán, Santa Cruz del Quiché y Antigua.

Por otro lado, como destaca Torres Rivas, el núcleo de la articulación que se transformó en un ciclo de protestas masivas, en las cuales decenas de miles de ciudadanos ocupaban casi semanalmente la plaza de la Ciudad, se desarrolló en un marco claramente “democrático burgués”, distanciándose de ideas rupturistas y anti-sistémicas (Torres Rivas, 2015:15). Ya la convocatoria inicial enfatizaba una apuesta a “la legalidad” y advertía a los participantes de evitar “cualquier cosa que pueda interpretarse como desorden público” (Prensa Comunitaria, 2015). Al paso de las semanas se fueron sumando ciudadanos, colectivos y agrupaciones llevando a una constelación multitudinaria que iba desde grupos de iglesias pentecostales, participantes con visiones reformistas en línea con entendimientos liberales, hasta proponentes de ideas autonomistas enfatizando la apropiación local de procesos de toma de decisiones.

Aunque las convocatorias y los debates en las redes seguían siendo articulados por actores y grupos particulares, el formato de las movilizaciones se iba acercando al entendimiento de una multitud como lo planteado por Hardt y Negri (2004): una aglomeración horizontal de singularidades con la tendencia y posibilidad de agregación de actores y grupos, de los cuales cada uno tenía su particular forma de relacionarse con el conjunto movilizado. Durante el curso de las protestas persistía esta pluralidad sin que conllevara una articulación de estas diferencias a través de una identidad colectiva. Los consensos mínimos que unían las movilizaciones fueron el rechazo a la clase política y al nivel descarado de corrupción que se había consolidado como *modus operandi* en todos los estamentos del Estado. Estos elementos sintetizaban el sentir del núcleo de los manifestantes: la clase media pequeño burguesa y ladina que estaba indignada por los niveles desenfrenados de corrupción que habían llevado al

### ... la atención de las protestas se dirigió hacia el principal candidato de oposición, Manuel Baldizón...

borde del colapso al Estado que históricamente había amparado sus intereses (Velázquez Nimatuj, 2016:225). Consecuentemente, estos sectores veían en las redes de corrupción un peligro para sus oportunidades profesionales y sus propias pretensiones de ascenso social (Fonseca, 2015:190).

El impulso del ciclo de manifestaciones se fue alimentando por los eventos coyunturales, nuevas revelaciones, así como el éxito de la presión social para forzar la renuncia y el retiro del derecho de antejuicio a la vicepresidenta. La persistencia de las protestas también impulsó a las élites y a la embajada de Estados Unidos a alinearse bajo el discurso de sentar un precedente para los ocupantes de cargos públicos. Al mismo tiempo operaban para calmar la situación, así como para mantener las formas y modos establecidos de hacer política según las pautas de la democracia posttransicional (Álvarez Aragón, 2016:33). En esta línea, buscaban evitar la interrupción del mandato del presidente Pérez Molina y alejar una posible suspensión del proceso electoral programado para el mes de septiembre.

Mientras que nuevas investigaciones iban cerrando el círculo alrededor del presidente Pérez Molina, la atención de las protestas se dirigió hacia el principal candidato de oposición, Manuel Baldizón, el cual hasta este momento había encabezado las encuestas para las próximas elecciones. Sin embargo, nuevas investigaciones de la CICIG revelaron cómo varios integrantes de su partido, incluyendo el vicepresidencialable Édgar Barquín, habían constituido una red para lavar dinero a cambio de favores políticos (Véliz, 2016:189-191). Bajo la consigna de “No le toca” y la idea de que representaba más de lo mismo, la presión de los manifestantes se enfocó en la posibilidad de evitar la permanencia de representantes de la clase política constituida en el poder.

Las pautas iniciales de las concentraciones se mantuvieron durante meses, y de manera similar a otros procesos multitudinarios, fueron caracterizadas por esfuerzos explícitos de evitar una articulación contra-hegemónica con una dirección articuladora delimitada, en términos de Laclau (2000). Esto se manifestó en la convocatoria a las concentraciones: “La manifestación es de todos los ciudadanos. No está previsto escenario, altavoces o equipo de sonido. Los carteles son suficientes. Cada quien participa con sus propios recursos y por su propia cuenta” (Prensa Comunitaria, 2016). Evitando los discursos, así como la distribución de propaganda política, las manifestaciones se acercaban en sus características a formas pos-hegemónicas, sin entrar a un proceso de construcción de una “cadena de equivalencia” (Laclau, 2000: 210), en la cual las diferentes agregaciones renuncian a parte de sus intereses particulares para articular un frente político e intereses comunes. Como destaca Ardití, las multitudes de este tipo reflejan nuevas tendencias en el acercamiento a lo político que contrastan con las pautas predominantes de los regímenes liberales anclados en la forma partidaria como herramienta principal de participación. Sin embargo, no suelen crear suficiente comunalidad para consolidarse como una fuerza política (Arditi, 2007:216).

Una consecuencia de esta horizontalidad multitudinaria fueron los límites de su sostenibilidad. El flujo organizativo en la Ciudad de Guatemala se mantuvo entre los meses de abril y septiembre de 2015 con concentraciones masivas casi semanales, caracterizadas por la rapidez de las movilizaciones facilitadas por la conectividad tecnológica que marca el área urbana. Culminaron a finales de agosto y conformaron la presión social necesaria para forzar la renuncia del presidente Pérez Molina el 2 de septiembre. Además, las élites oligárquicas hicieron un

giro estratégico en contra de Pérez Molina, mientras que la embajada de Estados Unidos le retiró su apoyo, no sin antes asegurar la continuación del proceso electoral y, por ende, alejar una mayor desestabilización del panorama político.

A partir de este momento se hicieron visibles las agregaciones de la multitud, que se empezó

### ... la vinculación con los sectores populares y marginales de la Ciudad fue débil durante el ciclo de las movilizaciones.

a disolver y fragmentar. El núcleo constituido por la clase media ladina regresó a una posición de inactividad y alineándose con los discursos mediáticos terminó conformándose con lo conseguido. Una serie de colectivos agrupados en la Asamblea Social y Popular, así como organizaciones sociales y campesinas insistieron en el aplazamiento de las elecciones y en la convocatoria a una

Asamblea Constitucional, con el argumento de que el *modus operandi* de la política iba a seguir sin reformas sustanciales en la legislación electoral. Estos actores también se esforzaron en mantener un vínculo con los procesos organizativos de las áreas rurales y en destacar la problemática principal en estos territorios: las políticas extractivistas y la represión del Estado (Véliz, 2016:184). Sin embargo, estos planteamientos orientados a una crítica más integral del sistema liberal-capitalista nunca fueron apropiados por el núcleo de las movilizaciones. Por otro lado, la vinculación con los sectores populares y marginales de la Ciudad fue débil durante el ciclo de las movilizaciones. Para este amplio sector de la población asentada en los barrios precarios, expuesta y a la vez subsumida a las formas más excluyentes del capitalismo, los vaivenes de la política formal permanecen lejanos. Otras prioridades y pautas predominan en sus asentamientos y en muchos casos una participación clientelista en la política formal a cambio de proyectos y donaciones parece llevar a resultados más concretos.

Es decir, con el cese de la dinámica de movilización volvieron a revelarse los contrastantes horizontes de posibilidad que caracterizan a la sociedad. Estos contrastes, también visibles en los espacios urbanos, aumentan en el relacionamiento con la sociedad rural, y en muchos casos son reforzados por el legado y las manifestaciones actuales de la complejidad étnica. En lo urbano, las expresiones multitudinarias pudieron momentáneamente contribuir a contrarrestar ciertas experiencias de enajenación y a abrir canales de participación en la esfera pública sin los riesgos, costos, ni los requerimientos logísticos asociados con la acción colectiva. Sin embargo, el núcleo de esta constelación agregativa estaba más interesado en reinstaurar cierta legalidad que les permitiera recuperar sus privilegios con relación al resto de la población, que en abordar las relaciones más estructurales de exclusión y discriminación.

Además, la reconfiguración de lo político en línea con los modos espontáneos e intermitentes de acercarse al espacio político deja vacíos en los cuales el dispositivo electoral y las expresiones del régimen político formal siguen operando. En el contexto del retiro de las clases medias urbanas, en la ausencia de una articulación contra-hegemónica con cierta amplitud, así como en el escenario de la renovada acentuación de los contrastantes horizontes de posibilidad, que se dieron en las elecciones del 2015. El rechazo a la clase política preparó el camino para la presidencia de Jimmy Morales, un comediante y pastor evangélico sin trayectoria política. Sin embargo, detrás de esta imagen de novato político se escondía la vinculación con los sectores de élites reaccionarias y con redes militares que buscaban una continuación de las pautas habituales en el terreno de la política.

Lo local se consolidó como punto de enunciación y centro de esta acción colectiva...

## Conclusión

El artículo plantea una revisión de las expresiones más importantes de la acción colectiva en la Guatemala de posguerra para derivar tendencias en lo que concierne a lo político, entendido como el campo de interacciones que trasciende el terreno formal de la política e incluye las múltiples formas de plantear demandas, y de cuestionar y disputar el ordenamiento social. Las dinámicas de la transición hacia una democracia formal y el posterior contexto de los Acuerdos de Paz marcaron las pautas para el régimen

político de posguerra. Imprimieron un carácter elitista y excluyente en el sistema político y prepararon el camino para que las redes de élites tradicionales y emergentes consolidaran su control sobre las posiciones claves del marco institucional y avanzaran con la reconfiguración neoliberal del Estado. En cambio, las expresiones partidarias derivadas de las fuerzas guerrilleras no fueron capaces de innovar sus planteamientos de cambio social y perdieron relevancia política. Por otro lado, una buena parte de las expresiones organizativas sociales, indígenas y populares, ya *per se* debilitadas por las décadas de represión, fueron subsumidas en un marco de Sociedad Civil cuyos términos estuvieron fuertemente influenciados por los donantes internacionales. Al ritmo que muchas expresiones organizativas se convirtieron en ONGs, profundizando sus fisuras y su alejamiento de los sectores populares y comunitarios de la sociedad.

Sin embargo, el contexto de posguerra también dio lugar al surgimiento de una ola de resistencias en el área rural, donde las comunidades se oponían a los intereses económicos orientados a la explotación de recursos naturales. Múltiples puntos de resistencia surgieron entre comunidades indígenas y ladinas desde el 2004 articulando una defensa de su territorio, desarrollando esfuerzos colectivos para mantener el control sobre los procesos de sig-

nificación y relaciones políticas en sus alrededores. Lo local se consolidó como punto de enunciación y centro de esta acción colectiva, con base en la premisa de articular normas y relaciones, así como de apropiarse de procesos de toma de decisiones basados en la participación directa de las personas que viven con ellos. A la vez que la respuesta represiva del Estado ha profundizado la desconfianza de las comunidades, las resistencias han intentado reconfigurar los mecanismos procedimentales excluyentes de la política formal con el fin de garantizar interacciones políticas más horizontales y la subordinación del liderazgo, así como los procesos de toma de decisiones, a la dimensión colectiva.

Mientras en el área rural se multiplicaron los puntos de resistencia que cuestionaban las políticas neoliberales, en el área metropolitana en el periodo de posguerra predominó la desarticulación, a pesar del surgimiento de expresiones incipientes de acción colectiva. Sin embargo, durante varios meses del 2015 fueron principalmente las clases medias urbanas ladinas quienes protagonizaron concentraciones multitudinarias en la plaza de la Ciudad de Guatemala. Convocados por los medios sociales y caracterizados por un alto grado de espontaneidad, fueron motivados por la amenaza que representaron las redes de corrupción para sus propias aspiraciones profesionales, así como para los privilegios que el Estado históricamente había garantizado a las clases pequeño-burguesas ladinas con respecto al resto de la población. A la vez constituyeron un factor clave para forzar la renuncia y persecución penal de altos oficiales del gobierno, mientras mantenían una constelación horizontal sin articulación o convergencia como fuerza política. Las concentraciones multitudinarias pudieron abrir momentáneamente canales de participación, sin embargo, con el cese de las dinámicas de movilización y las elecciones del 2015 parecía regresar el *modus operandi* de la política formal y la pasividad del núcleo urbano de las protestas.

En este sentido, las articulaciones de posguerra permiten trazar las dinámicas inherentes a la reconfiguración de lo político. Las expresiones rurales evidenciaron a partir de la defensa del territorio el intento de ensanchar lo político en lo local, conllevando intentos de repensar formas de participación y procesos de toma de decisiones. En los últimos años también se han dado intentos de trascender lo local para crear frentes de luchas anti-neoliberales y articular consensos más amplios como la nacionalización de la electricidad. No obstante, al alejarse de lo local no sólo se enfrentan a un mayor número de segmentos, intereses y planteamientos no integrados. Esta ampliación también inserta formas de organización más verticales y limita los mecanismos horizontales y participativos que dan sostenibilidad a muchos de los procesos locales.

En el ámbito urbano, los intentos de resucitar las dinámicas de movilización en el 2016 y en el 2017 no han tenido éxito. La clase media y media alta ladina de la Ciudad ha recobrado una postura de pasividad y, después de la fragmentación del marco multitudinario del 2015, se revela su reticencia a articularse alrededor de intereses más allá de los propios de estos sectores en términos de corrupción e inseguridad. El 2015 indica cómo nuevas formas intermitentes de participación se están consolidando, las cuales sin duda representan modos alternativos de acercarse a lo político. Pese a ello, de momento estas formas multitudinarias no parecen contribuir a reconciliar los contrastantes horizontes de posibilidad, los cuales se refuerzan por la complejidad cultural y étnica del país.

#### Bibliografía:

ÁLVAREZ ARAGÓN, Virgilio (2016), *La revolución que nunca fue. Un ensayo de interpretación de las jornadas cívicas de 2015*, Guatemala Ciudad, Seviprensa.

ARDITI, Benjamín (2007), "Post-hegemony: politics outside the usual post-Marxist

- paradigm”, en *Contemporary Politics*, vol. 13, núm. 3, septiembre.
- ARRAZOLA, Carlos (2014), “Estas son las Comisiones de Postulación más deslegitimadas”, en *Plaza Pública*. Dirección URL: <<https://www.plazapublica.com.gt/content/estas-son-las-comisiones-de-postulacion-mas-deslegitimadas>>.
- BASTOS, Santiago (2010), “La política maya en la Guatemala posconflicto”, en Santiago BASTOS y Roddy BRETT (editores), *El Movimiento Maya en la década después de la paz (1997-2007)*, Guatemala, F&G Editores.
- BEASLEY-MURRAY, Jon (2010), *Posthegemony*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- BIEKART, Karen (1999), *The Politics of Civil Society Building: European Private Aid Agencies and Democratic Transitions in Central America*, Amsterdam, Utrecht International Books and the Transnational Institute.
- DE LANDA, Manuel (2002), *Intensive Science & Virtual Philosophy*, New York, Continuum.
- GRANOVSKY-LARSEN, Simon (2014), “The Guatemalan Campesino Movement under Neoliberal Peace”, en *Latin American Perspectives*, 20(30).
- HARDT, Michael y Antonio NEGRI (2004), *Multitude. War and Democracy in the Age of Empire*, London, Penguin.
- HELD, David (2006), *Models of Democracy*, Cambridge, Polity Press.
- HOWELL, Jude y Jenny PEARCE (2001), “Civil Society Discourses and the Guatemalan Peace Process”, en Jude HOWELL y Jenny PEARCE (editores), *Civil Society and Development. A Critical Exploration*, London, Lynne Rienner Publisher.
- ILLMER, Patrick (2016), *Afirmando la “diferencia”, defendiendo el territorio: dos casos de acción colectiva en la Guatemala posconflicto*, Bilbao, Universidad de Deusto.
- ILLMER, Patrick (2018a), “La violencia y las élites en Guatemala: pactos en la interfaz de lo legal y lo ilegal”, en José Luis ROCHA y Dennis RODGERS (editores), *La violencia centroamericana en el siglo XXI*, El Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Estudios Centroamericanos 73.
- ILLMER, Patrick (2018b), “The defence of territory and local struggle for more democracy in post-war Guatemala”, en *Democratization*, vol. 25, núm. 5.
- KIOUPKIOLIS, Alexandros (2018), “Movements post-hegemony: how contemporary collective action transforms hegemonic politics”, en *Social Movement Studies*, vol. 17, núm. 1.
- LACLAU, Ernesto (2000), “Structure, history and the political”, en Judith BUTLER, Ernesto LACLAU y Slavoj ŽIŽEK (editores), *Contingency, hegemony, universality*, London y New York, Verso.
- LEVENSON, Deborah (2013), “What happened to the revolution? Guatemala City's Maras from Life to Death”, en Carlote MCALLISTER y Diane NELSON (editores), *War by other means. Aftermath in Post-Genocide Guatemala*, Durham, N. C., Duke University Press.
- MACLEOD, Morna (2013), “Pueblos Indígenas y revolución: Los (Des)encuentros entre indianistas y clasistas”, en Virgilio ÁLVAREZ ARAGÓN, Carlos FIGUEROA IBARRA, Arturo TARACENA ARRIOLA, Sergio TISCHLER VISQUERRA y Edmundo URRUTIA GARCÍA (editores), *Guatemala: Historia reciente (1954-1996)*, Guatemala, FLACSO, tomo III: Pueblos indígenas, Actores políticos.
- MERRY, Engle Sally (2006), “Transnational Human Rights and Local Activism: Mapping the Middle”, en *American Anthropologist*, vol. 108, núm. 1.
- MOUFFE, Chantal (2005), *On the Political*, London, Routledge.

- NÓMADA (2014) “Las 5 claves para entender la disputa por la justicia”, en *Nómada*. Dirección URL: <<https://nomada.gt/pais/las-claves-para-entender-la-disputa-por-la-justicia-2/>>.
- PALENCIA PRADO, Mayra (2002), *El Estado para el capital: la arena fiscal, manzana de la discordia entre el empresariado y el poder público*, Guatemala, FLACSO.
- PRENSA COMUNITARIA (2015), “#RENUNCIAYA: Miles de personas se manifestarán pacíficamente”. Dirección URL: <<https://comunitariapress.wordpress.com/2015/04/24/renunciaya-miles-de-personas-se-manifiestaran-pacificamente/>>.
- RANCIÈRE, Jacques (1999), *Disagreement: Politics and Philosophy*, Minneapolis, University of Minnesota Press.
- SOLÍS MIRANDA, Regina (2016), “La Cosecha”, en Regina SOLÍS MIRANDA (editora), *La Fuerza de las Plazas. Bitácora de la indignación ciudadana en 2015*, Guatemala Ciudad, Friedrich Ebert Stiftung.
- SÁENZ DE TEJADA, Ricardo (2007), *Revolucionarios en tiempos de paz: rompimientos y recomposición de las izquierdas de Guatemala y El Salvador*, Guatemala Ciudad, FLACSO.
- SCHMITT, Carl (1991), *El concepto de lo político*, Madrid, Alianza Universidad.
- SWYNGEDOUW, Erik (2009), “The antinomies of the post-political city: In search of a democratic politics of environmental production”, en *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 33, núm. 3.
- TORRES-RIVAS, Edelberto (2008), “Las elecciones de 2007: 8 reflexiones para una conclusión”, en Virgilio ÁLVAREZ ÁRAGON y Ricardo SÁENZ DE TEJADA (compiladores), *Izquierdas y construcción de orden democrático en Guatemala. Una aproximación a las elecciones de 2007*, Guatemala, Fundación Friedrich Ebert.
- VAN DE SANDT, Joris (2009), *Conflictos mineros y pueblos indígenas en Guatemala*, Guatemala, Cordaid.
- VELÁZQUEZ NIMATUJ, Irma A. (2016), “Hasta dónde la corrupción definió la participación de los pueblos indígenas en el 2015?”, en Regina SOLÍS MIRANDA, *La Fuerza de las Plazas. Bitácora de la indignación ciudadana en 2015*, Guatemala Ciudad, Friedrich Ebert Stiftung.
- VÉLIZ, Rodrigo (2016) “¿Esto apenas empieza? Las raíces de la crisis política guatemalteca”, en Regina SOLÍS MIRANDA, *La fuerza de las plazas. Bitácora de la indignación ciudadana en 2015*, Guatemala Ciudad, Friedrich Ebert Stiftung.
- ŽIŽEK, Slavoj (1991), *For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor*, London, Verso.